

Santiago, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En esta causa RUC N° 2201170639-1, RIT N° 113-2023, el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago el nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictó sentencia en que se condenó a las acusadas Vanessa Estefani Montenegro Bustamante y Diana Méndez Austenritt, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autoras del delito de robo con violencia, en grado de tentativa, que se castiga como consumado conforme al artículo 450 del Código Penal, ilícito cometido en horas de la mañana del día 22 de noviembre de 2022, en la comuna de Macul, sanción que deberá cumplirse de manera efectiva.

Por la misma sentencia, se las absuelve de los cargos formulados en la acusación de ser autoras del delito de amenazas, en grado de consumado, supuestamente cometido el mismo día 22 de noviembre de 2022, en la comuna de Macul.

En contra de la decisión, la defensa de las sentenciadas dedujo recurso de nulidad, el que se estimó admisible por este Tribunal y se conoció en la audiencia pública celebrada el veintiocho de septiembre del año en curso, como da cuenta el acta que se levantó con la misma fecha.

Y considerando:

Primero: Que la defensa de las sentenciadas interpuso recurso de nulidad fundado en la causal principal prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, atendido que existe una afectación a la garantía del



imputado de ser juzgado por un tribunal imparcial, por cuanto durante el transcurso del juicio oral, el Ministerio Público solicitó incorporar, como prueba nueva, conforme al artículo 336, inciso segundo del Código Procesal Penal, una supuesta conversación entre la acusada Vanessa Montenegro con la víctima, que contaminó al tribunal, influyendo sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Explica que al permitir incorporar el tribunal oral ese medio de prueba, afectó el derecho a la defensa y el debido proceso, pues se permitió al ente persecutor plantear diligencias de investigación en el juicio oral, alterando la sustanciación regular de éste, violando el principio de contradicción y además, afectando la imparcialidad de los jueces.

Señala que luego que la acusada Vanessa Montenegro aseverara que había tenido contacto con la víctima, pero que no la había amenazado, la Fiscalía solicitó incorporar como prueba nueva un antecedente que no estaba en la carpeta investigativa y que la defensa desconocía, consistente en una captura de pantalla de una conversación por Facebook Messenger, entre la víctima y una cuenta que supuestamente sería de la acusada, para que el tribunal valorara la veracidad del relato de la mencionada imputada, en lo referente a su afirmación de la inexistencia de amenazas proferidas a la víctima con posterioridad a los hechos materia de la acusación, a lo que los jueces accedieron.

Explica que si bien el tribunal no reconoce expresamente que se incorporó prueba nueva, ni que ésta fue determinante para desestimar el relato de la acusada, se puede advertir que ello influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.



Por ello, solicita se invalide el juicio oral y la respectiva sentencia condenatoria, parcialmente, sólo respecto de la condena por el delito de robo con violencia, a fin de que se lleve a efecto un nuevo juicio oral, por el tribunal no inhabilitado que corresponda.

En subsidio, interpone la causal contemplada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal, atendido que la víctima en ningún momento declara que la imputada Diana Méndez la apuntó con un arma o que las acusadas le requirieran la entrega de anillos o se los hayan tratado de quitar.

Agrega que la funcionaria policial Stephanie Oñate, al llegar al lugar, solo aprecia a tres mujeres, dos de ellas golpeaban a la tercera, por lo que desciende del vehículo junto a otros Carabineros a prestarle ayuda, sin apreciar otras circunstancias.

Arguye que el tribunal a quo reconoce que la defensa tenía una teoría alternativa, que consistía en una pelea entre las tres mujeres, pero la desecha sin hacerse cargo de los antecedentes que sirven para probarla, infringiendo el principio de la razón suficiente, pues no indica los motivos por los que desestima el relato de las imputadas respecto a la ausencia del ánimo de apropiación, sin tampoco referirse a los restantes antecedentes que sirven para corroborar esas versiones.

Afirma que se trata de una sentencia basada en los meros presentimientos de la víctima, único antecedente que se tuvo a la vista para tener por acreditado el ánimo de apropiación, lo cual infringe el principio de razón suficiente, debido a que no se puede reproducir el razonamiento realizado por el tribunal.



Finaliza pidiendo se declare la nulidad parcial del juicio oral y de la sentencia definitiva, solo respecto de la condena por el delito de robo con violencia, determinando el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordene la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado para que se disponga la realización de un nuevo juicio oral.

Segundo: Que el tribunal de la instancia, en el motivo quinto de la sentencia atacada, asentó como hecho probado que *“El día 22 de noviembre de 2022, siendo aproximadamente las 9:00 horas, Diana Méndez Austenritt y Vanesa Montenegro Bustamante, invitaron a “RESERVADO” a acompañarlas, subiendo a una micro, llegando hasta calle Ramón Cruz con Ignacio Carrera Pinto, en la comuna de Macul, lugar en el que descendieron y comenzaron a caminar, momentos en el que Montenegro y Méndez comienzan a solicitar a “RESERVADO” que les prestara sus anillos, el teléfono celular, a lo que ésta se negó, procediendo Méndez a extraer una pistola a balines, de apariencia verdadera, con la cual apuntó e intimidó a la víctima, “RESERVADO”, señalándole “me caíste mal, yo soy la más chora, entrega los anillos conchetumadre”, y a su vez Montenegro le dijo “entrega la hueá conchetumadre, entrega los anillos”, luego de lo cual, entre ambas la toman y botan al suelo, procediendo a pegarle patadas y combos en distintas partes del cuerpo y tratar de quitarle los anillos de las manos, momento en el cual Carabineros pasó por el lugar, quienes al observar lo que estaba sucediendo procedieron a detener a ambas mujeres. Producto de los golpes la víctima resultó con lesiones leves consistentes en abrasión en codo derecho.” (sic).*

Estos hechos fueron calificados como un delito tentado de robo con violencia, previsto y sancionado en el artículo 436 inciso primero en relación a los artículos 439 y 432 del Código Penal.



Tercero: Que, en lo referente a la causal principal sustentada en la infracción al artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, se debe tener presente que con relación al agravio a la garantía del debido proceso, esta Corte ha resuelto uniformemente que debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, límite o elimine su derecho constitucional al debido proceso.

Asimismo, este tribunal ha señalado que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento. (SCS Roles N° 2866-2013, N° 4909-2013, N° 21408-2014, N° 4269-19, N° 76689-20, N° 92059-20 y N° 112392-20)

En este entendido, la declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento a la invalidez, pues de ésta han de derivar las consecuencias lesivas para el ejercicio de los derechos de que se trate, y que, a estos efectos se entiendan vinculados al artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal.

Cuarto: Que, en particular, en relación a los reproches efectuados por la defensa de las imputadas, es del caso subrayar que, tal como recientemente ha dicho esta Corte Suprema frente a presentaciones similares, las argumentaciones formuladas por la asesoría letrada, tienen el carácter de genéricas y abstractas, esto es, dicen relación con alegaciones predicables a



todos los juicios de esta clase, y por ello, aquel planteamiento que se hace a este tribunal, claramente, no deriva de la realidad del juicio que nos ocupa.

En este aspecto, lo único concreto que se alega, es que los jueces autorizaron la incorporación como prueba nueva de una captura de pantalla de una conversación por Facebook Messenger entre la víctima y una cuenta que supuestamente pertenecería a una de las acusadas, conforme al artículo 336 inciso segundo del Código Procesal Penal; lo que habría derivado en que por su incorporación los jueces tomaran conocimiento de hechos que no fueron investigados y de un antecedente que no fue ofrecido previamente, con el objeto de que adquirieran una determinada posición frente a las encartadas en su versión de lo acontecido, perdiendo su imparcialidad, sin precisar acabadamente cómo aquellas circunstancias habrían determinado la decisión de condenar a las acusadas.

El recurso omite, entonces, referir por la defensa cómo se produjo la precisa vulneración a las garantías que se señalan infringidas y, finalmente, cómo ello influyó causalmente en el resultado del juicio.

Quinto: Que, en consecuencia, por los fundamentos previamente desarrollados y no bastando la afirmación genérica de la vulneración de la garantía del debido proceso y a los principios acusatorio y de inmediación, sin que se haya explicitado por el recurrente el sustento fáctico y la sustancialidad de la pretendida vulneración a esa garantía y principios, la causal principal habrá de ser desestimada.

Sexto: Que, en lo referente a la causal subsidiaria, que se funda en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal, cabe tener presente que, en reiterados pronunciamientos, este tribunal ha sostenido que toda sentencia criminal debe



razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar con rigor intelectual la corrección de la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable.

Motivar la decisión sobre los hechos significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos de éstos por probados sobre la base de los elementos de convicción obtenidos contradictoriamente en la litis. Tal deber apunta no sólo a hacer inteligible la decisión, sino también a asegurar un modo de actuar racional en el terreno previo de la fijación de las premisas fácticas del fallo.

El cumplimiento de este deber posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha movido dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, el fallo es el resultado de la arbitrariedad o del mero capricho. Es por ello que en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el resultado de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre por qué se decidió de esa manera -y no de otra-, explicación que deberá ser comprensible y compartible por cualquier tercero, también mediante el uso de la razón. (SCS 28.842-2015, de 20 de enero de 2016).

Séptimo: Que, desde los inicios del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal se ha venido sosteniendo que la legislación procesal penal ha sido especialmente exigente en orden a imponer a los jueces que conocen y



resuelven en definitiva en juicio oral un trabajo cuidadoso en la redacción de sus sentencias.

La preocupación esencial de toda sentencia penal de fijar los hechos y circunstancias que se tuvieran por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 del Código Procesal Penal. Esta norma, si bien es cierto ha facultado a los tribunales para apreciar la prueba con libertad en abierta y franca discrepancia con el sistema probatorio tasado del modelo inquisitivo, lo ha hecho en el entendido que los tribunales no pueden en modo alguno, como primera limitante, contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados; y luego exige que para hacer esa valoración, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba, únicos o plurales, por los cuales se dieren por probados cada uno de los hechos y circunstancias atinentes a la litis.

Octavo: Que, la exigencia de fundamentación armoniza también con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 36 del Código Procesal Penal, aplicable en la especie por ser una disposición común a todo tipo de resoluciones dictadas en el juicio oral.

Estas exigencias tampoco están desprovistas del correspondiente respaldo constitucional. Así el inciso 6° del N° 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República declara que *“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”*.



Si dichas reglas no son respetadas, la causal del apartado e) del artículo 374 del Código citado en concordancia con los artículos 342, letra c), y 297, todos de Código Procesal Penal, prevé la nulidad del juicio y la sentencia.

Noveno: Que, precisada en abstracto la cuestión, habrá de resolverse si el fallo de la especie incurre en tales omisiones en lo que concierne al delito de robo con violencia.

Décimo: Que, para la acreditación de los hechos típicos de la norma sancionatoria –robo con violencia-, se contó con los testimonios de la víctima, de la funcionaria policial Stephanie Scarleth Oñate Araneda y de un certificado de lesiones de la ofendida, extendido en el CESFAM Santa Julia.

La víctima expresó que se juntó con las acusadas para concurrir a una fiesta, con tal fin se dirigieron a la población Santa Julia, pero que al llegar al lugar comenzaron a pedirle sus cosas, como el teléfono celular y los anillos que portaba, pero se dio cuenta que no se los iban a regresar, por lo que tomó la decisión de no continuar, momento en el que Diana Méndez se puso agresiva, sacó una pistola y le requirió la entrega de especies, negándose a ello, por lo que comenzaron a golpearla, instantes en que llegaron funcionarios de Carabineros a auxiliarla.

Por su parte, la testigo Stephanie Scarleth Oñate Araneda, funcionaria de Carabineros, señaló que vio a tres mujeres, dos de ellas golpeaban a la tercera por lo que descendieron del móvil a prestarle ayuda, señalando la víctima que le habían querido quitar sus anillos y la habían amenazado con una pistola, encontrando el arma en poder de la imputada Vanessa Montenegro, dentro de una cartera.



También se incorporó al juicio oral un certificado de lesiones de la víctima, extendido en el CESFAM Santa Julia, el 22 de noviembre de 2022, en que se describen sus lesiones, las que consisten en abrasión codo derecho.

Undécimo: Que el delito de robo con violencia previsto en el artículo 436 del Código Penal requiere, en cuanto al tipo objetivo, una acción de apropiación y de un atentado en contra de la libertad, integridad física o síquica de una persona, empleando violencia, esto es, malos tratamientos de obra y, respecto del tipo subjetivo, el conocimiento debe comprender el querer apropiarse de bienes ajenos empleando esos malos tratamientos.

Por ello, desde el punto de vista de la presunción de inocencia es necesario demostrar, mediante la producción de la prueba en juicio, más allá de toda duda razonable, no solo la conducta de propinar malos tratamientos de obra al sujeto pasivo, sino, además, que el autor de ellos persigue apoderarse de bienes muebles ajenos.

Duodécimo: Que conforme a lo expresado, los testigos que prestan declaración, concuerdan en los malos tratamientos de obra que las acusadas propinaron a la víctima, que le provocaron lesiones cuya entidad fue posible conocer con el certificado emitido por el CESFAM.

Solo a través de la declaración de la ofendida se establece que las imputadas le requerían la entrega de especies a modo de préstamo, expresando que creyó que no se las devolverían, por lo que se negó a ello, procediendo las acusadas a agredirla con golpes para obtener tal fin y exhibiéndole una pistola, sin que exista otro elemento de corroboración para establecer tales circunstancias; obviando el tribunal que la funcionaria policial solo observó los golpes que le propinaban las acusadas a la ofendida y que la imputadas, al prestar declaración en el juicio sólo reconocieron que le pidieron



prestados unos anillos y que luego se pusieron a pelear, sin que el tribunal exija otro antecedente que confirme lo aseverado por la víctima, desde que es la única que se refiere al hecho que la violencia (malos tratamientos de obra) ejercidos por las imputadas tuvieran por objetivo que se apropiaran de las especies cuya entrega era requerida.

Así las cosas, el ánimo de apropiarse de determinados bienes ajenos utilizando la violencia tiene como única fuente para su establecimiento la versión entregada por la víctima, sin que exista otro medio probatorio que corrobore tal versión, por lo que necesariamente el tribunal está obligado a razonar sobre la suficiencia de esa única prueba para acreditar uno de los presupuestos establecidos en el tipo penal, en relación con la restante prueba producida.

A este respecto, el fallo no explicita el proceso de valoración de las pruebas que lo llevó a concluir que la violencia utilizada por las imputadas estaba encaminada finalísimamente a apropiarse de bienes muebles ajenos. En efecto, toda vez que no establece qué otro antecedente adicional existe para corroborar la versión de la víctima, más si ésta señala expresamente que creyó que no le devolverían las especies, pues la entrega era requerida como un préstamo, limitándose a señalar que conforme a la declaración de esta última se acreditaban tales exigencias, no siendo verosímiles lo expuesto por las acusadas por no haber proporcionado algunos antecedentes que estiman imprescindibles, no obstante que señalan los motivos por los cuales actuaron pero no los dan a conocer, lo cual evidencia el incumplimiento del deber de fundamentación previsto en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación al artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal.



Décimo tercero: Que la falta de fundamentación del fallo condenatorio impugnado en lo concerniente al delito de robo con violencia que se ha demostrado, obliga a anular el juicio y la sentencia respecto de este ilícito, porque importa incurrir en la referida causal del apartado e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, esto es, un motivo absoluto que “siempre” genera invalidación.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 297, 342, letra c), 374, letra e), 384 y 386 del Código Procesal Penal, se decide que SE ACOGE el recurso de nulidad promovido por la defensa de las sentenciadas Vanessa Estefani Montenegro Bustamante y Diana Méndez Austenritt, por lo que SE ANULA el juicio oral y la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés, pronunciada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, sólo en cuanto al cargo por el delito de robo con violencia y se repone el procedimiento al estado de celebrarse un nuevo juicio respecto de las indicadas acusadas en relación a esos precisos hechos, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, ante el tribunal oral competente y no inhabilitado que corresponda, declarándose que respecto del delito de amenazas, dicho juicio y sentencia son válidos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

N° 200137-2023.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., María Teresa De Jesús Letelier R. y Abogado Integrante Eduardo Valentín Morales R. Santiago, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

